

**Acuerdo de 13 de septiembre de 2017, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación “Suministro, instalación y puesta en marcha de doce mamógrafos digitales directos adaptables a tomosíntesis con destino en doce hospitales del Servicio Madrileño de Salud, y cinco estaciones de diagnóstico específicas para el diagnóstico por imagen del programa poblacional de detección precoz del cáncer de mama de la Comunidad de Madrid (programa DEPRECAM), en dos centros del Servicio Madrileño de Salud”, número de expediente PA. SUM-37/2017.**

Con fecha 30 de agosto de 2017, se ha recibido en este Tribunal escrito de don Gustavo Caspueñas Bello en nombre y representación de Fujifilm Europe GMBH, Sucursal España (FUJIFILM), formulando recurso especial en materia de contratación, contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) que rigen el contrato mencionado.

En el recurso se solicita que se acuerde la suspensión del procedimiento de adjudicación en virtud de lo previsto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) que establece: *“En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de la misma naturaleza que las mencionadas en el artículo anterior, cuya adopción solicite.”*

El órgano de contratación en el informe preceptivo establecido en el artículo 46.2 TRLCSP, no se manifiesta sobre la medida solicitada.



En este caso y como establece el apartado 4 del artículo 43 del TRLCSP *“la suspensión del procedimiento que pueda acordarse cautelarmente no afectará, en ningún caso, al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados”*. Por lo que en este momento del procedimiento no cabe la suspensión de la tramitación.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aún concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el



órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuando el estado avanzado en la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación muy similar o incluso ya con la adopción de la decisión de adjudicación.

En relación con el estado de tramitación del expediente administrativo, consta que el plazo de presentación de ofertas finaliza el 13 de septiembre, estando prevista la apertura de ofertas para el 9 de octubre de 2017.

Dado el estado de tramitación del expediente y los breves plazos de resolución del recurso es previsible que éste esté resuelto con anterioridad a la fecha prevista para la apertura de ofertas. No obstante sería posible llegar a la apertura de las mismas con anterioridad a la resolución del recurso, debiendo el Tribunal garantizar el secreto de las mismas ante una posible estimación, motivo por el cual este Tribunal considera que debe permitir la continuación del expediente y a la vez garantizar que ni se conozcan las ofertas ni se celebre el contrato sin que se haya decidido sobre el fondo del asunto.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato. Con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación se evita que con la posible formalización del contrato se puedan causar otros perjuicios a los interesados afectados y especialmente al adjudicatario, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción y se evita que se produzcan situaciones que pudieran derivar en indemnizaciones a los perjudicados.



De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 del TRLCSP, este Tribunal por unanimidad,

### **ACUERDA**

Suspender la tramitación del expediente de contratación “Suministro, instalación y puesta en marcha de doce mamógrafos digitales directos adaptables a tomosíntesis con destino en doce hospitales del Servicio Madrileño de Salud, y cinco estaciones de diagnóstico específicas para el diagnóstico por imagen del programa poblacional de detección precoz del cáncer de mama de la Comunidad de Madrid (programa DEPRECAM), en dos centros del Servicio Madrileño de Salud”, número de expediente PA. SUM-37/2017, a partir del día anterior a la fecha prevista de apertura de ofertas.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

**LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL**

